

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL PROYECTO
DE PLAN HIDROLÓGICO DEL DUERO PARA EL
PERÍODO 2022-2027.

D. Conrado Iscar Ordóñez con D.N.I. _____, Presidente de la Diputación de Valladolid.

D. Gumersindo Sanabria Santervás con D.N.I. _____, Presidente del Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería de la Rama Agrícola de Castilla Duero.

D. Ignacio Arias Ubillos, con D.N.I. _____, Presidente de Unión de Campesinos de Valladolid UCCL.

D. Jesús Fernando García Martín, con D.N.I. _____, Secretario y Responsable del Área de Regadío de Aguas Subterráneas, CUAS, de ASAJA Valladolid.

D. Alberto Duque Ruiz, con D.N.I. _____, como Presidente de C.O.A.G. Valladolid.

D. Armando Caballero Vadillo, con D.N.I. _____, Vicepresidente de URCACYL y Presidente de la Asociación de Aguas Subterráneas de Castilla y León.

D. Máximo Gómez Domínguez, con D.N.I. _____, Presidente de la CUAS Tierras de Medina.

D. Miguel Ángel Peláez Lorenzo, con D.N.I. _____, Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas.

D. Javier del Campo Diez, con D.N.I. _____, como Técnico de la Comunidad de Regantes de Geria – Simancas - Villamarciel.

D. Moisés Santana Alonso, con D.N.I. _____, como Presidente de la Mancomunidad Tierras de Medina.

D. Guzmán Gómez Alonso, con D.N.I. _____, como Presidente de la Mancomunidad Tierras del Adaja.

D^a. M^a Henar González Salamanca, con D.N.I. _____, Presidenta de la Mancomunidad Río Eresma.

D. José Arenal Velasco, con D.N.I. _____, Vicepresidente de la Mancomunidad La Churrería.

D. Miguel Ángel Oliveira Rodríguez, con D.N.I. _____, Presidente de la Mancomunidad Vega del Duero.

D. Jesús Ángel González Morago, con D.N.I. _____, Ingeniero Técnico Agrícola del C.O.I.T.A Castilla Duero.

- D. Lucio Fernández Choya** con D.N.I. , Editor de “Empresa Agraria de Castilla y León”.
- D. César López Calvo**, con D.N.I , Ingeniero de Minas de “Prohidro Ingeniería y Minas, S.L.”
- D^a. Araceli Álvarez Álvarez**, con D.N.I Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid.
- D^a. Celia Miravalles Calleja**, con D.N.I , Abogada de Agronews Castilla y León.
- D. Luis Mariano Sayalero Sanz**, con D.N.I , Ingeniero Técnico Agrícola de “Fuensol 2006 S.L.”

EXPONEN:

Que se ha realizado un análisis y revisión del “**Borrador del Proyecto de Plan Hidrológico del Duero para el período 2022-2027**”, comprobándose que se mantienen propuestas que venían recogidas en el anterior plan hidrológico y que no han sido llevadas a cabo por parte del organismo de cuenca durante el período 2015-2021.

Durante los últimos años se ha modernizado e implantado nuevos regadíos, demostrándose que son una medida eficaz para la mejora de la competitividad de las explotaciones, que aportan valor añadido al medio rural, y que luchan contra la despoblación.

Desde este punto de vista, se considera que el Borrador:

1. No da una solución al reto demográfico ni a la despoblación del mundo rural.
2. No presenta un equilibrio entre objetivos sociales y económicos con criterios ambientales, siendo este último el único criterio seguido, lo cual perjudica la actividad agraria y el desarrollo de regadíos.
3. No aborda la problemática que tienen el sector agrícola.
4. No estudia adecuadamente las actividades socioeconómicas, agrarias, ganaderas, agroindustriales, silvícolas, y sobre todo las humanas que se desarrollan en el mundo rural.
5. Debe realizar un resumen REAL Y VERAZ que se ajuste a todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicación de la versión precedente del Plan.
6. Debe realizar una evaluación REAL Y VERAZ de los progresos realizados en la consecución de los objetivos medioambientales y sobre todo enumerar los OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES NO ALCANZADOS, así como realizar un

estudio real de las causas que han originado el por qué no se han podido cumplir dichos objetivos.

7. Pretende cumplir unos objetivos que no son reales, sino que adopta medidas que van en contra de la población rural y en contra de las actividades agrícolas y ganaderas de se desarrollan en el campo.
8. Debe realizar una valoración exacta de los recursos reales de la masa de agua superficial y subterránea.
9. Aplica medidas adicionales transitorias (adoptadas o que se adopten) del Plan Hidrológico, para las masas de agua que probablemente no alcancen los objetivos ambientales previstos, generando desconcierto en la población rural, así como falta de futuras inversiones en el sector rural, originando una despoblación del campo.
10. Carece de medidas ambiciosas de investigación de nuevas fuentes y recursos de agua. Básicamente es un plan represor en su obstinada forma de ver el consumo y limitar la gestión del agua. Todas las medidas van encaminadas a RECAUDAR y a SANCIONAR por el consumo de agua.

Consideramos que se pretende criminalizar a los actores que viven en él y se intenta hacer culpable ante la sociedad a los agricultores y ganaderos, así como en general a las personas que viven y desarrollan su actividad ligada dentro del mundo rural; acusándoles de manera directa e indirecta del mal estado cuantitativo de las aguas y de la mala calidad de suelos y aguas de la Cuenca del Duero.

Vemos como todas las medidas y objetivos propuestos en dicho Plan van encaminadas al despoblamiento del mundo agrario y consecuentemente una vez eliminada la carga social se eliminará la carga ambiental que efectúan dichas personas con su actividad agraria, ganadera e industrial sobre el medio ambiental.

Por todo ello, se presentan las siguientes alegaciones:

ALEGACIÓN Nº 1.- REGULACIONES

La cuenca del Duero es la que menor capacidad de regulación tiene, a excepción de las del norte de España. Demandamos las siguientes actuaciones mínimas: **Actuaciones para mejora de aguas subterráneas (Lastras de Cuellar, recrecimiento Santa Teresa, balsas laterales de Tordesillas).**

- Realización de la presa de **Lastras de Cuellar en el río Cega**, que se incluía en el EPTI, actuación de la cual la Confederación Hidrográfica del Duero contrató la redacción de un anteproyecto y un estudio de impacto ambiental, y que no se entiende la razón por la que desaparece del Plan.
- **Recrecimiento de la presa de Santa Teresa, en el río Tormes**, para desarrollar completamente la zona de la Armuña, al menos en la previsión actual del plan hidrológico de 16.000 hectáreas destinadas a la sustitución de regadíos de aguas subterráneas en las zonas más deprimidas del acuífero. Esta actuación permitirá sustituir regadíos de aguas subterráneas de la provincia.
- **Balsas laterales de Tordesillas**, que permitirían un almacenamiento de aguas invernales del río Duero, que se emplearía para la sustitución de regadíos subterráneos en la zona de Tordesillas.

Asimismo, demandamos **la inclusión de una medida que refleje la ejecución de estudios tendentes a planificar más actuaciones que se puedan ir concluyendo, en lo que se refiere a su ejecución, en los siguientes horizontes de la planificación.**

ALEGACIÓN Nº 2.- AGUAS SUBTERRÁNEAS

Consideramos que el planteamiento correcto es el uso sostenible de las aguas subterráneas y que la reducción de los usos actuales no sea la única medida a adoptar.

Se mantiene en este Tercer Ciclo de Planificación lo que ya en el ciclo anterior era esencial de este documento, reiterándose de nuevo muchas de las apreciaciones que entonces se recogían.

Ante esto, nos parece importante señalar que cuando se lleva a cabo la descripción y localización del problema se debería incluir una referencia a que difícilmente se puede solucionar el problema si las medidas más importantes contenidas en la planificación hidrológica no se han ejecutado. No se puede, en consecuencia, solucionar un problema que ya se puso de manifiesto en una planificación hidrológica del ciclo anterior, si no se ponen en práctica aquellas medidas esenciales que se determinó que lo podían solucionar.

Nos parece importante resaltar en su justa medida, la importancia que tiene para el mantenimiento de la actividad socioeconómica la utilización de estos recursos subterráneos en la actividad agraria, y debemos indicar de forma clara y explícita que, entre los objetivos de la planificación que se pretenden alcanzar, ha de figurar el de revertir la situación actual, alcanzando el buen estado cuantitativo de las masas de agua subterránea, pero añadiendo que la satisfacción de las demandas ha de hacerse de tal manera que no suponga una merma en los aprovechamientos con concesión de agua actuales, ya que esto supondría una pérdida de la capacidad de mantenimiento de la actividad y de la población en estas zonas del medio rural, que no disponen de otra alternativa productiva, ni debe ponerse en cuestión su medio de vida.

Cualquier alternativa que se considere debe tener como objetivo prioritario este mantenimiento de la actividad productiva actual, que es la que permite mantener el tejido social del medio rural en estas zonas, siendo necesario introducir la perspectiva del reto demográfico y valorar cual será la incidencia de las alternativas que se propongan respecto a esta cuestión. En definitiva, proponer alternativas que comporten soluciones sostenibles que unifiquen el objetivo de un índice de explotación por debajo de 0,8 y mantener los aprovechamientos existentes en uso que acrediten diferentes derechos reconocidos.

Mantener la consideración existente hasta la fecha respecto a las zonas con limitaciones específicas, **debiendo desaparecer la consideración de zona no autorizada en los municipios en los que no se ha llegado al índice de explotación marcado**. No se considera adecuado tomar, con carácter preventivo, medidas restrictivas de carácter amplio que tendrán consecuencias para el futuro y para el desarrollo de las explotaciones. Aplicar en un territorio limitaciones, con independencia de cuál sea su situación respecto al índice de explotación y tendencia

de niveles piezométricos, parece una prevención injustificada. La aplicación de restricciones cuando los índices de explotación superan 0,75, supone suficiente resguardo y garantía para conseguir la recuperación en estas zonas de las masas. Por ello, no se considera justificado aplicar a mayores, las restricciones en los municipios dónde no se haya llegado a estos índices de explotación como si fueran zonas no autorizadas.

Por todo ello planteamos las siguientes actuaciones:

1.- Conocimiento exacto de la situación actual de los valores del recurso disponible y su tasa de renovación, así como las extracciones anuales que se están llevando a cabo.

2.- Regularización de la situación concesional.

3.- Reducción de las extracciones de aguas subterráneas mediante la sustitución de bombeos en aquellas zonas donde sea posible la utilización de los recursos superficiales, sin afectar al buen estado de estas masas o comprometer futuro.

4.- Constitución de comunidades de regantes de aguas subterráneas como unidades básicas y órganos de gestión del aprovechamiento sostenible del recurso poniendo sobre el terreno aquellas medidas de planificación hidrológica que permitan esta sostenibilidad, con su correspondiente financiación pública para llevarlas a cabo.

1. Valoración del recurso disponible y de las extracciones.

En la valoración del recurso disponible sin duda se debe tener en cuenta la evolución piezométrica, pero no en el sentido que se considera en la ficha. Se debe analizar la tendencia existente en esta evolución, pero a partir del momento en que se tomaron las primeras medidas para el control de las masas de agua ya que es esta información la que determina si estas medidas son acertadas o es necesario variarlas.

En ningún caso se debe pretender ver en los datos históricos de los piezómetros, en el inicio de la explotación del recurso, el objetivo a alcanzar y hacer un análisis excesivamente alarmista cuando se describe la evolución temporal del problema, debiéndose poner de manifiesto de forma clara, porque así lo indican los datos que se muestran en la ficha, que en aquellas masas de agua donde se venía trabajando de forma más intensa (Tordesillas, Los Arenales, Medina del Campo y Tierra del Vino) los índices de explotación se han mantenido estables y la tendencia de los niveles piezométricos es creciente en los últimos diez años.

Analizando estos datos a partir del año 2001, año en que comenzó a tomarse medidas, la reversión de las tendencias piezométricas en estas masas de agua parece clara y esto debe ser considerado así en la descripción, sin que esto sea

óbice para considerar que debe buscarse en todo momento un aprovechamiento sostenible de estos recursos que mantenga las masas de agua, ya que esta es la forma de garantizar la permanencia de su uso futuro por las explotaciones agrícolas.

Valorando la importancia de estos datos piezométricos es necesario demandar que se hagan estudios hidrogeológicos de detalle en los que de forma pública y accesible a todos los interesados se analice la situación real de las aportaciones al acuífero y su tasa de renovación, información que sigue siendo escasa y obliga al empleo de propuestas teóricas para la toma de decisiones, que no siempre pueden ser acertadas.

Para realizar un óptimo balance que determine el índice de explotación necesario para mejorar las masas de agua, mejore el conocimiento de las aportaciones anuales en cada zona, y en consecuencia poder ajustar así las extracciones, son necesarias mejores informaciones sobre todas estas cuestiones.

Estamos viendo actualmente como en determinados términos municipales se declara un índice de explotación que la experiencia nos muestra como erróneo puesto que los balances se están llevando a cabo con datos del recurso disponible cuanto menos poco evidentes para el ciudadano y datos de las extracciones derivados de las declaraciones PAC, que muestran los teóricos cultivos de secano o regadío de una explotación, cumplimentados con datos teóricos de consumo, no existiendo un sistema de control eficiente de las extracciones reales.

En cuanto a las extracciones anuales, debe ser el contador de cada una de las captaciones el que aporte el dato de consumo anual si bien, y teniendo en cuenta la facilidad con la que se producen averías en estos mecanismos por las sustancias que estas aguas subterráneas arrastran en determinadas zonas, es necesario constatar estos datos mediante sistema de teledetección y comprobaciones aleatorias en campo, siendo las comunidades de regantes el instrumento que mejor permite llevar a cabo este procedimiento siempre y cuando se las dote de los medios y apoyos necesarios para proceder a su ejecución.

Deberá ser la Confederación Hidrográfica del Duero la que proporciones este apoyo y la que mantenga una situación de control sobre estas comunidades y sobre todo sobre aquellos aprovechamientos no integrados en las mismas o cuyo funcionamiento sea ilegal.

2. Regularización de la situación concesional.

Expresamos la necesidad de facilitar al usuario la regularización de los diferentes derechos inscritos mediante procesos jurídicamente seguros y eficaces pero con una tramitación sencilla y breve. Esto, junto con un Registro actualizado y corregido con datos reales, permitirá eliminar duplicidades y disponer, incidiendo en lo señalado en el punto anterior, de una información actualizada y fiable de lo que realmente existe en el campo.

En ningún caso esta regularización debe amparar los “peajes” que se proponen en la Alternativa 2, ya que supondrían una penalización a aquel usuario que pretende la adaptación del aprovechamiento a la legalidad vigente, hecho gravoso y cuanto menos poco razonable y jurídicamente discutible.

En cuanto a los aprovechamientos amparados bajo al artículo 54.2 del TRLA (Sección b del Registro), planteamos su regulación en cuanto a convertirlos en un instrumento que, en aquellas masas en mal estado cuantitativo, suponga una reserva para adjudicar recursos a aquellos planteamientos económicos de nueva implantación con demandas reducidas (leñosos, ganaderas o pequeñas industrias), intensificando sobre ellos las medidas de control para que no se haga un uso inadecuado.

En lo que se refiere a los denominados “pozos de minas”, parece procedente abordar la solución de forma definitiva al ser aprovechamientos que vienen funcionando de manera continua desde su ejecución con anterioridad a la vigente Ley de Aguas y cuyos volúmenes extractivos suponen un conflicto frente a la regulación que se pretende con la constitución de las comunidades de regantes y una distorsión sobre los índices de explotación de las zonas donde radican.

Para ello se propone la regularización de oficio, sin necesidad de mediación judicial con carácter general, de todos aquellos aprovechamientos que demuestren que están en funcionamiento desde el momento en que recibieron la autorización de la administración competente y con las dotaciones y superficies con las que fueron autorizados y funcionaron con anterioridad al 1 de enero de 1986, todo ello demostrable a través de las propias autorizaciones y proyectos o mediante tecnologías disponibles para la determinación de las superficies regadas. No obstante, seguimos reclamando que se abra la posibilidad normativa de regularizar estos aprovechamientos.

Entendemos que dentro de las decisiones que pueden adoptarse de cara la configuración del futuro Plan Hidrológico debe procederse a introducir una regulación transitoria que abra un nuevo plazo que permita la inscripción de estos aprovechamientos en el Catálogo de Aguas Privadas, y que se permita su uso sin que tal uso sea objeto de sanción en tanto se regulariza la situación de los mismos.

En la MODIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA EXISTENTES, se podrá acreditar la necesidad de aplicar dotaciones unitarias netas a los diferentes cultivos SUPERIORES o INFERIORES a las que se especifiquen en el plan hidrológico siempre que se justifique técnicamente dicha necesidad mediante el correspondiente estudio agronómico, que evalúe la evapotranspiración del cultivo en la zona de implantación para un periodo de años necesarios que permita una mayor aproximación a la realidad de los déficits hídricos, de los suministros y consumos reales de los cultivos. En este sentido ha de primar la dotación total anual autorizable frente a la dotación unitaria por Ha, que no ha de ser rígida.

En las zonas de NO AUTORIZADAS de las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo se deberán permitir modificaciones de los aprovechamientos

existentes que NO impliquen un incremento del índice de explotación (rotaciones en superficies mayores, captaciones de apoyo, captaciones de sustitución, modificaciones de las captaciones) etc., independientemente de que estos aprovechamientos estén o no incluidos dentro de una Comunidad de Usuarios de las especificadas en el capítulo 201 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En caso necesario se establecerán, para las modificaciones de los citados aprovechamientos, comunidades de usuarios con convenios específicos como indica el artículo 203 del mencionado R.D.

En las zonas con LIMITACIONES ESPECIFICAS de las masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo se permitirán las modificaciones del apartado anterior con incrementos de los volúmenes ya autorizados, que se estudiarán caso a caso en función de la dotación solicitada, la evolución de los piezómetros de referencia y del recurso disponible en la masa.

3. Sustitución de bombeos.

No pueden considerarse únicamente ni la agricultura ni la ganadería como sectores generadores del problema ya que realmente son los sectores que sufren el problema, y para ellos hay que buscar soluciones equilibradas y compatibles con la recuperación cuantitativa de los recursos subterráneos.

Planteamos la sustitución de recursos subterráneos por superficiales en aquellas zonas donde sea posible la utilización de los recursos superficiales sin afectar al buen estado de estas masas o comprometer su futuro, con las siguientes actuaciones:

- Regulación del Eresma que terminara de consolidar los regadíos de aguas subterráneas, sin reducir la superficie vinculada a ellos.
- La ejecución de la ampliación de la recarga ya prevista del Carracillo (Segovia), así como otras recargas de las masas que sean técnicamente posibles, junto con la realización de la presa de Lastras de Cuellar en el río Cega.
- La sustitución de zonas de aguas subterráneas con recursos del Tormes (Salamanca, Ávila y Medina del Campo) garantizada con el recrecimiento de la presa de Santa Teresa.
- El desarrollo de balsas laterales en la zona de Tordesillas (Valladolid)

Estas sustituciones en ningún caso pueden suponer la reducción de las extracciones y de la superficie regada en estos momentos tal y como se propone en la Alternativa 2 de esta ficha, más aún cuando no se contemplan recursos económicos compensatorios por la supresión de unos derechos consolidados e inscritos y que la propia sustitución, al disminuir la presión sobre la masa de agua afectada, junto con una gestión imaginativa (reutilización, mejoras de la eficiencia, sustitución de

cultivos, ...), sería y sostenible del recurso, posibilitaría el mantenimiento de dicha superficie, los derechos dados y la actividad económica y socio cultural del territorio.

4. Constitución de comunidades de regantes (CUAS).

Junto con todo lo anterior, el aprovechamiento sostenible del recurso para conseguir unas masas de agua subterránea en buen estado que permitan el mantenimiento de la actividad agraria y el medio socio cultural que están generando únicamente es viable desde una gestión eficaz y eficiente tanto del recurso como de los agentes que intervienen en su entorno para lo cual planteamos la constitución de comunidades de regantes voluntarias en estos ámbitos como entes de gestión en estas zonas.

Para ello, se considera que deberían tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las comunidades de regantes han de constituirse con la aportación de todos los derechos existentes en su territorio que de forma voluntaria quieran inscribirse, adaptados a las dotaciones de la planificación hidrológica, e incluyendo los derivados del proceso de regularización del volumen concesional de los pozos de minas anteriormente aludidos, cuando se produzca.
- Una vez constituidas, el Organismo de cuenca debe disponer en la zona de la masa afectada de los elementos de control que posibiliten evaluar anualmente las tasas de recarga de la masa para poder determinar a la comunidad el volumen de recursos, que con independencia de su derecho inscrito, tenga que gestionar cada campaña. La inercia que tienen las masas subterráneas puede permitir anticipación en esta determinación y correcciones de unos años con otros, de manera que se consiga con esta determinación que el nivel piezométrico de las masas se siga recuperando.
- Las CUAS tendrán que gestionar a través del plan anual de cultivos los recursos asignados cada año, adoptando las medidas internas de control de uso que garanticen que los recursos usados en cada campaña no superan los disponibles y asignados.
- Los volúmenes anuales asignados, sobre todo los primeros años de andadura, deben conseguir aunar el sostenimiento de la actividad productiva actual con la sostenibilidad del recurso por lo que el ajuste se debe hacer de forma paulatina garantizando un "bonus" de reserva a aquellas comunidades cuya gestión demuestre la mejora del estado de la masa para su aprovechamiento posterior si fuese el caso.
- La constitución de las comunidades resuelve el problema de la rotación de cultivos y el control de los volúmenes usados cada campaña y, como consecuencia, se reducirían los trámites de modificación de características o

los procedimientos sancionadores y se otorgaría una mayor seguridad a los usuarios y un alivio en la presión sobre los medios humanos disponibles en el Organismo de cuenca.

Nos oponemos al establecimiento de “peajes” (reducción en el volumen autorizado) en la transformación de derechos privados a concesionales, o en la modificación de las características de las concesiones en las masas de agua en mal estado cuantitativo, y mucho menos deberá prohibirse la modificación de la captación con la ampliación de la superficie regable. Ello sólo conlleva a la pérdida de rentabilidad y el abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas y no favorece la modernización de las mismas.

Del mismo modo, nos oponemos a la imposición de peajes para la solicitud de modificación de características en las concesiones, que sean causadas por motivos agronómicos y que no influyen en el consumo de agua.

No aplicar canon de utilización del D.P.H. (art. 112.4.b del T.R.L.A.) puesto que ello sólo conlleva a la pérdida de rentabilidad y el abandono de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las propuestas de modificación que presentamos buscan conseguir un equilibrio entre la mejora cuantitativa de las masas de agua indicadas en el Plan con problemas cuantitativos, que en la provincia de Valladolid se encuentran en:

- Tordesillas-Toro, situada en Valladolid y Zamora.
- Los Arenales y Tierra de Pinares, situada en Valladolid, Segovia y Ávila.
- Los Arenales – Tierras de Medina y La Moraña, situada en Valladolid, Salamanca, Ávila, Segovia y Zamora.

ALEGACIÓN Nº 3.- CONTAMINACIÓN DIFUSA

Nos oponemos a la prohibición total de conceder derechos concesionales para ganadería y regadíos en zonas vulnerables en mal estado químico o riesgo de estarlo. Se impide el otorgamiento de derechos concesionales para ganadería y regadío en las zonas vulnerables, en mal estado químico o en riesgo de estarlo, sin tener en cuenta que estas actividades, adecuadamente realizadas, no tienen por qué incrementar los excesos de nitrógeno.

Habría que exigir el cumplimiento de una serie de prácticas, como la adecuada aplicación de los residuos como aportación al suelo, o el empleo de tecnología para realizar un adecuado balance de fertilización. En definitiva, abogamos por exigir el cumplimiento de una serie de prácticas en estas actividades que no incrementen los excesos de nitrógeno.

No compartimos que las soluciones sean limitativas y proponemos adoptar medidas de uso sostenible como la mejora para conocer el origen y actuar de forma sostenible o impulsar la formación e información sobre uso de herramientas y actuaciones para el uso adecuado de la fertilización.

Sobre la evolución temporal del problema.

A la hora de definir el problema se siguen mencionando los resultados del Balance de Nitrógeno de la Agricultura Española sin referirse a que dichos resultados están basados en superficies de cultivo y carga ganadera y con una metodología que no puede medir la eficiencia del uso del fertilizante.

Es importante destacar que si los sistemas de evaluación de los balances del nitrógeno se basan en las superficies de cultivo y las cabezas de ganado para repartir los excedentes (como es el caso del Balance de Nitrógeno de la Agricultura de España), sean cuales sean las acciones encaminadas a reducir los excedentes en las Zonas Vulnerables, sus efectos no serán apreciados en tanto en cuanto no se materialicen en una reducción de actividad agraria, que en ningún caso es deseable. Las acciones que se diseñen deben buscar la optimización del uso de los fertilizantes y los residuos bajo la premisa del mantenimiento de la actividad y su rentabilidad agraria.

Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea, la inercia del sistema en los acuíferos profundos es muy larga por lo que valorar los resultados de las acciones que se lleven a cabo a través de las mediciones de calidad del agua en los sondeos no será posible en muchos casos, siendo conveniente diseñar algún tipo de sistema de indicadores específicos para valorar la eficiencia de las medidas adoptadas en las Zonas Vulnerables en las que son de obligado cumplimiento las buenas prácticas agrícolas del Decreto 5/2020, de 25 de junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.

Sobre la naturaleza y origen de las presiones generadoras del problema.

Cuando se indican “otras fuentes de contaminación difusa como puede ser aquella derivada de escorrentía de zonas urbanas, infraestructuras de transporte, zonas industriales abandonadas, terrenos forestales y zonas mineras”, en ningún momento se localizan estas presiones como sí lo están las teóricamente derivadas de la actividad agraria. Si realmente queremos atajar el problema deberemos diferenciar las procedencias, localizar todas las zonas y aquellos puntos conocidos de contaminación por estos otros motivos, para aplicar sobre ellos las mejores técnicas disponibles de control y mejora como ya se están aplicando en el caso de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en agricultura a través, por ejemplo, de la dosificación variable.

Sobre las medidas que se propone adoptar:

En lo que se refiere a la medida a realizar por la Administración General del Estado en cuanto a “*Realizar los ajustes necesarios en las redes de control y en los programas de seguimiento, con el objetivo de obtener la máxima información sobre la magnitud del problema de la contaminación por fuentes difusas en coordinación con el resto de administraciones*”, sería conveniente en el futuro, intentar separar el origen del nitrógeno en las redes de control de cara a focalizar mejor el problema en cada una de las masas de agua afectadas por contaminación.

Para ello se deberían usar las técnicas isotópicas mencionadas en la ficha, técnicas que podrían emplearse como una analítica de verificación en aquellos puntos de la red de control de aguas que tengan altos niveles de nitratos. Esta información sería útil también para investigar posibles fuentes puntuales de contaminación u otras fuentes no agrarias en el caso de que se identificara un origen orgánico en áreas sin presencia significativa de actividad ganadera.

Respecto a las actuaciones normativas que corresponden a las Comunidades Autónomas, concretamente en lo que se refiere a “Incluir en el Plan de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas respectivas una acción que permita que los particulares, titulares de terrenos colindantes con el DPH, puedan ofrecer el servicio sistémico ambiental como son el establecimiento y mantenimiento de las bandas de protección señaladas a través de compensaciones económicas adecuadas. Igualmente, en los procesos de concentración parcelaria ubicar las superficies de masas comunes en estas bandas de protección de cauces”, se debe tener en cuenta que en el proceso de Concentración Parcelaria, las masas comunes tienen una función concreta en cuanto a la resolución de recursos y otras necesidades a lo largo del proceso, además de tener una finalidad diferente en relación con los titulares a quien se entregan para su explotación (Comunidades de Regantes y Ayuntamientos). Estas masas en consecuencia deben ubicarse en lugares estratégicos para ir resolviendo estos problemas a lo largo del proceso.

Sin embargo, la superficie dedicada a restauración del medio natural sí que puede dedicarse a la función descrita en este apartado, y en este sentido se debe concretar

dentro del proceso administrativo el destino y como se han de implementar el uso de estas superficies.

La inclusión de una línea de ayudas vinculadas a la PAC para compensar estas bandas de protección es importante puesto que, simplemente optar por su abandono, puede suponer un importante foco de problemas fitosanitarios.

En este sentido se propone permitir la utilización de estas superficies a modo de Superficies de Interés Ecológico en las que se permita el cultivo de especies fijadoras de nitrógeno que permiten el aprovechamiento de estas bandas sin aporte de fertilización y con un control fitosanitario del entorno.

Respecto a lo que se indica como *“Incluir en el Plan de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas respectivas una acción dirigida a impulsar y fomentar mediante el apoyo adecuado sistemas de dosificación variable de fertilizantes (que permite ajustar las dosis de fertilizante para cubrir la potencialidad del suelo), sistemas de autoguiado de máquinas y corte de tramos (tecnología que facilita el guiado autónomo de las máquinas y el control de los tramos en las aplicaciones de productos, evitando solapes y las dobles aplicaciones), sistemas de apoyo a la toma de decisiones de fertilización que asesore a los productores (en línea con la Farm Advisory Tool for Nutrients - FAST que impulsa la Comisión Europea). Estas líneas de acción podrían aplicarse en todas las zonas con problemas de contaminación por nitratos y, reforzadas, en las Zonas Vulnerables.”*, se propone el incremento económico de las actuales líneas de ayuda ministeriales que ya incluyen este tipo de máquinas y mayor facilidad en la tramitación de las mismas.

No obstante, para conseguir unas producciones que hagan rentable la actividad agraria y obtener el máximo partido de la potencialidad del suelo, son necesarias unas dosis adecuadas de fertilizantes y la tecnología necesaria para ello, para lo que es fundamental avanzar en la modernización de las explotaciones en cuanto al regadío y la fertirrigación, potenciando el uso y consumo sostenible de los recursos con formación, información y transparencia para una actividad sostenible respecto al medio que ocupa, productiva y rentable.

Se achaca la actividad de regadío como uno de los factores que más contamina por el uso de los fertilizantes y fitosanitarios. Mediante la modernización de regadíos se evitan las escorrentías de agua, en el riego, así como una mayor eficiencia en los aportes de abonos y fitosanitarios. Todo esto sin olvidar que para una producción rentable hay que usar unas dosis adecuadas de abonos.

ALEGACIÓN Nº 4.- CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL

Entendemos que para la población total de la cuenca de Duero, el tener una carga equivalente de 645.479 habitantes equivalentes (14 % de la cuenca), con vertidos autorizados no adecuados... para el siglo y el año en el que vivimos no nos parece correcto. Hay fórmulas de depuración eficaces y aún más fórmulas de acuerdos, y si fuera necesario financiación a largo plazo, para llegar a anular este tipo de vertidos “autorizados – no adecuados”.

Desde el principio de que “quien contamina paga”, proponemos que las industrias que se encuentren en los supuestos dichos, se les propongan soluciones para atajar el problema. Y los municipios que también se encuentren dentro de ese 14 %, encontrar las fórmulas con las Diputaciones Provinciales correspondientes para desarrollar con ellas los proyectos más adecuados a su carga. Solo es problema de colaboración.

En cuanto a los vertidos de temporada de las Industrias Agroalimentarias, nos remitimos a lo indicado en el primer párrafo, teniendo en cuenta que, en general, los costes de implantación de la Industria Agroalimentaria en el medio rural son menores. Proponemos vigilar estos vertidos “autorizados no adecuados” para que sean “autorizados adecuados” y dejen de ser una carga negativa. Recordemos las tecnologías blandas de depuración que para pequeños municipios está dando excelentes resultados con el adecuado, correcto y mínimo mantenimiento.

En cuanto a las fórmulas, se pueden arbitrar varias, desde las ayudas estatales, autonómicas y provinciales hasta la formación de los propios empresarios en las I.A. y de los responsables municipales.

ALEGACIÓN Nº 5.- ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS

Para el mantenimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfológicas, se debe saber el estado real de las masas de aguas para tener un correcto balance hídrico tanto en las masas subterráneas como las aguas superficiales.

Se deben hacer estudios objetivos hidrogeológicos y publicarlos de forma accesible a todos los interesados, dándonos un mapa real del estado de nuestra Cuenca y el estado real de nuestras aguas. De esta forma, podremos realizar un óptimo balance de las mismas, teniendo un conocimiento más correcto de las aportaciones anuales en cada zona y de las extracciones en las mismas.

Las previsiones de la Confederación son alarmistas, cerrando con el nuevo Plan Hidrológico la posibilidad en todo momento conceder nuevos aprovechamientos en aguas superficiales y en masas subterráneas en mal estado cuantitativo.

Se deben seguir pudiendo solicitar y conceder por parte de la Confederación, en todas las masas de agua subterránea y superficiales, independientemente de su estado cuantitativo, la posibilidad de que se permitirán nuevas captaciones con pozos, sondeos o manantiales, así como la legalización de los existentes para usos privativos de los especificados en el artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

ALEGACIÓN Nº 6.- IMPLANTACIÓN DE CAUDALES ECOLÓGICOS (DU-05)

No estamos de acuerdo a lo referido en el Artículo 42.1. b,c`): Contenido de los planes hidrológicos de cuenca.... del TRLA. *“La asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto se determinarán:*

Los caudales ecológicos, entendiéndolo como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.

Las reservas naturales fluviales, con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”

No estamos de acuerdo con lo expresado en todo el capítulo III ni en las tablas de del apéndice 5.

Los caudales ecológicos máximos modifican sustancialmente las garantías de los usos existentes; se propone que la alternativa 0, no incluya el régimen de caudales máximos sobre todo en el estiaje de los meses de julio, agosto y septiembre, en los mismos embalses que se enumeran.

La aplicación de caudales máximos en los ríos regulados, reflejados en el documento es inviable y contrario al uso del regadío y el cumplimiento de las demandas agrarias que dependen de la regulación de los embalses de cabecera. Este hecho está en contraposición del Reto Demográfico, habida cuenta que la actividad agraria en su conjunto ha demostrado directamente proporcional a la fijación de población en el Medio Rural.

Quede claro que estamos en contra de mejorar (subir) los caudales ecológicos mínimos de invierno y primavera en ninguna masa de agua, en tanto en cuanto no se aumente la capacidad de regulación. Desde el comienzo de los tiempos siempre ha habido estiajes y la vida en los ríos ha permanecido.

Recordemos que la capacidad de regulación de la cuenca del Duero es del 31 % muy por debajo de las de las cuencas: Ebro 50%, Tajo 90%, Guadalquivir 115% y Gadiana 218%.

Estamos a favor de impulsar el estudio de la viabilidad de infraestructuras de regulación, incluso cerca de las demandas y por supuesto la posibilidad del aumento de la capacidad de regulación de cuenca por el recrecido de presas Etc. Como se ha demostrado en *“Posibilidades de Aumento de Recursos Hídricos en Castilla y León”* realizado por la Universidad de Burgos, presentado en varias ponencias.

ALEGACIÓN Nº 7.- SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO

Dos de los objetivos de la planificación hidrológica contenidos en el TRLA son: La atención a las demandas, incluido el regadío, y el incremento de la disponibilidad del recurso hídrico.

Incrementando la capacidad de regulación y no reduciendo la presión, que en el texto se interpreta como la extracción de agua sobre las masas de agua superficial para alcanzar los objetivos medioambientales previstos por la CHD, derivará en el abandono de las zonas rurales dado que aminorará la capacidad de desarrollo y rentabilidad agraria, provocando el abandono y éxodo aún mayor del medio rural.

Creemos en soluciones alternativas:

1.- Incrementando la capacidad de embalse

2.- Realizando el recrecido de los embalses de Castrovido, Compuerto, Riaño, Porma, Villameca, Aguilar, Cuerda del pozo y las Cogotas; y más dado que el coste de estimación expresado es de 261,22 millones de euros, haciendo que los objetivos de planificación hidrológica fueran mejores.

Estamos a favor del desarrollo completo de las zonas de la Armuña y Payuelos y no de su revisión. Creemos muy conveniente la primera para la mejora de las aguas subterráneas de Salamanca, Tierra del Vino y Medina del Campo. También se debería estudiar la posibilidad de regeneración de los cursos pluviales desde el Tormes a los ríos Poveda, Trabancos y Zapardiel, en meses de sobrantes de agua.

Creemos en el ahorro del agua en base a la eficiencia de su uso, y por ello consideramos que se debe dar más impulso a la modernización de los regadíos, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, que sobradamente viene demostrando su eficacia en satisfacer las demandas.

Se considera que existe la necesidad de una mayor regulación de la Cuenca del Duero, cuestión planteada por varios estudios como el realizado el año pasado por la Universidad de Burgos, que además refleja una serie de actuaciones para incrementar los recursos de almacenamiento.

Aumentando la capacidad hídrica de la cuenca podrían solventarse otros problemas también recogidos en el esquema. Así, para frenar los efectos del cambio climático, la construcción de embalses o recrecida de los existentes, permitiría aumentar el almacenamiento los años de mayor pluviometría (evitando inundaciones) para utilizarlo los años de sequía. Además, esta medida favorecería las modernizaciones del regadío, e incluso podrían pasarse riegos subterráneos a superficiales, lo que haría mejorar el estado de las masas de agua subterráneas sin necesidad de tomar medidas drásticas en cuanto a su uso.

Una mayor disponibilidad de agua permitiría el establecimiento de unos caudales ecológicos acordes al mantenimiento de la biodiversidad de la cuenca, sin que esto tenga que suponer una restricción del uso del agua por los diferentes agentes.

También queremos poner de manifiesto que, en años de sequía, el Sistema Pisuerga-Bajo Duero necesitaría las aportaciones del Alto Duero. Con ello, lograríamos un regadío más sostenible y la posibilidad de avanzar en el desarrollo rural.

Demandamos la incorporación a los presupuestos en el horizonte 2021-2027 las siguientes actuaciones reflejadas en el estudio “Posibilidades de aumento de recursos hídricos de Castilla y León”, no solo de restauración (Apéndice 2.1), que en el caso que afecta a la provincia de Valladolid son:

- Embalse de Cigüñuela, Azud de Carbonero y Lastras de Cuéllar en el Sistema Cega
- Regulación de los ríos Cea y Valderaduey en el Sistema Esla-Valderaduey
- Recrecido del Embalse de Santa Teresa en el Sistema Tormes

ALEGACIÓN Nº 8.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y GARANTÍAS

“La planificación hidrológica debe orientarse a analizar la robustez y resiliencia del sistema frente a situaciones de estrés, para identificar dónde es más vulnerable y proponer medidas de adaptación”. Se pretende conseguir en base a:

- La reutilización de las aguas.
- Un ahorro y eficiencia del agua.
- Políticas tarifarias para el uso racional y eficiente.
- Autorizaciones que tengan en cuenta la reducción de aportaciones.

Sin embargo, creemos que se debería hablar de aumentar la capacidad de regulación y embalse dando mayor estabilidad al sistema. No entendemos otra vía dado que, al parecer, las aportaciones se reducirán en un 11 %. Se lograría con recrecimientos de presas, creación de balsas y demás propuestas presentadas en el estudio realizado por la Universidad de Burgos para FERDUERO y el ITACYL.

Con este mayor almacenamiento se podría conseguir que la cuenca dejara de ser anual y pasara a bianual, con lo cual habría más posibilidades de luchar contra el cambio climático, almacenando los años de avenidas y teniendo almacenado para los años de sequía.

También creemos necesario revisar el “Convenio de Albufeira” dado por el simple axioma “Si hay menos ... hay menos para todos”, para adaptarlo a las realidades que se van presentando.

Desde nuestro punto de vista, siempre se habla de dos orígenes para el uso del agua: Superficial y subterránea. Sin embargo todos hemos experimentado el agua atmosférica, más en verano en la superficie de un vaso frío al sol y en una terraza....(efecto rocío → diferencias de temperaturas) se produce el efecto físico de condensación, produciéndose agua en toda la superficie del vaso. Este hecho ya ha sido desarrollado por varias empresas, no solo españolas, sino Gobiernos, como el Israelí. Volvemos a pedir que por parte del Ministerio se promueva la Investigación y desarrollo de este efecto físico, y que se comience a ver como una alternativa más de captación de agua inagotable.

En este Borrador del Plan ni se menciona esta posibilidad y sin embargo cada vez está tomando más importancia sobre todo para el abastecimiento es situaciones extremas o de catástrofe. Las investigaciones recientes en cuanto al coste están bajando exponencialmente a niveles de poderse utilizar en invernaderos, poblaciones, explotaciones agropecuarias..... etc.

ALEGACIÓN Nº 9.- OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS HÍDRICOS-INFRAESTRUCTURAS

Queremos apoyar la implementación de los planes de emergencia de las presas que, como bien se dice, superan los 70 años, así como la modernización de sus sistemas de explotación. Las Juntas de Explotación deben denunciar y demandar la seguridad de sus embalses ante todo, y su eficacia en el cumplimiento de su objetivo.

En lo referente a derechos de aguas superficiales en ríos regulados, creemos que deben ser aplicados por igual a todos los usuarios del sistema, ya sean canales del estado o regadíos concesionales, en años de sequía y años normales.

Así mismo pedimos que las dotaciones establecidas en un sistema de explotación se revisen siempre y a lo largo de cada campaña para optimizar las demandas, tanto en períodos de sequía como sin ella.

Por último, solicitamos que se mejoren y cuiden las infraestructuras existentes, así como su ampliación cuando fuese posible.

ALEGACIÓN Nº 10.- RECUPERACIÓN DE COSTES Y FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS

Los Estados deben asegurar la recuperación de costes de los usos del agua en base a la participación contributiva de los usuarios de la agricultura, industria y hogares. La Unión Europea recomienda a España que adecue la correcta implementación del artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, o en su caso, justificar en los Planes Hidrológicos la excepción de la aplicación de este principio.

La recuperación se llevará a cabo mediante el principio de “quien contamina paga” y con este principio.... Los Estados deben garantizar que la política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y contribuyan al logro de los objetivos ambientales.

Después de varias justificaciones en el anexo 9, se proponen gravámenes muy ambiguos por lo que creemos en la necesidad de proponer la implantación de un canon concesional, para que los usuarios que utilicen el bien público como lo es el agua, contribuyan a los gastos que se originan al ponerlo a su disposición.

Por último, se solicita una mejor gestión de los recursos recaudados por la CHD, suprimiendo gastos innecesarios y eliminando duplicidades.

ALEGACIÓN Nº 11.- ORDENACIÓN Y CONTROL DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

Desde este colectivo y en varias ocasiones hemos pedido más agilidad en las tramitaciones administrativas pidiendo la mejora de los procedimientos asociados a las tramitaciones de expedientes administrativos, así:

- Concesiones
- Autorizaciones
- Modificaciones de características.... etc.

Solicitamos que se busque la simplicidad, claridad y reducción de plazos en los procedimientos, buscando la eficacia para cualquier tramitación. Consideramos que existe una excesiva complejidad sobre todo al completar los expedientes de Jóvenes Agricultores.

Creemos que se deben potenciar la creación de las Juntas Centrales de Usuarios, como ayuda y refuerzo a las plantillas de vigilancia y control administrativa del uso del Dominio Público Hidráulico y del Registro de Aguas de la cuenca. Igualmente se solicita la gestión y organización de manera eficiente de las plantillas existentes, sin tener que incrementarlas.

ALEGACIÓN N° 12.- COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Entendemos que la “participación activa” es el sistema más adecuado de entendimiento entre partes. Solo cuando hay un desequilibrio provocado es cuando se producen los enfrentamientos, es por ello que abogamos por este principio en justa medida y equilibrio con todos los actores implicados, incluidas las organizaciones profesionales agrarias que representan al sector agrario.

ALEGACIÓN Nº 13.- GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

En cuanto al párrafo siguiente: *“que no se ocupen las llanuras de inundación por actividades sensibles de carácter permanente, ni se autorice la construcción de viviendas en zonas de riesgo; que se amplíen los espacios fluviales de crecida, retranqueando o eliminando motas y diques y creando cauces de alivio; que se multipliquen los esfuerzos de información y de explicación a la sociedad”*, se indica en algunos casos pueden verse afectadas gravemente diferentes zonas, y entre ellas, explotaciones de regadío plenamente consolidadas. Salvo casos excepcionales, nos oponemos a cualquier pérdida o regulación de cualquier derecho ya adquirido por establecimiento consolidado.

Por último, demandamos las siguientes peticiones:

1. Para cualquier actuación localizada debe tenerse en cuenta a la gente que vive en el territorio y que es quien mejor conoce en profundidad sus necesidades y las del territorio. Son los que pueden resultar beneficiados o perjudicados por cualquier tipo de actuación.
2. Todas las explicaciones pseudo-científicas sobre las amenazas del cambio climático, deben utilizarse con el objetivo de fomentar la actividad agrícola, buscando el incremento de la población del medio rural y evitando así la desertización del campo.

ALEGACIÓN Nº 14.- ARTÍCULOS ESPECÍFICOS DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

Alegación 14.1:

ARTÍCULO 37.2.a) No ha de considerarse zona no autorizada toda la superficie de una masa de agua en mal estado cuantitativo. Los términos municipales en una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo que no alcance un nivel de explotación del 0,75 deberían considerarse con Limitaciones Específicas como sucede en el Plan Actual.

Alegación 14.2:

ARTÍCULO 38.1.d) En zona no autorizada, cuando se pretenda una modificación de una concesión existente para regadío dirigida a aumentar superficie de riego o bien ampliar el riego a otras parcelas en rotación sobre un perímetro mayor, sin incremento de volumen total anual concedido, este aumento de superficie NO HA DE LIMITARSE al que permitan las dotaciones señaladas en el artículo 13.6.a), sino a la que sea posible justificar con un informe agronómico, siempre por debajo de los valores máximos señalados en el artículo 13.6.a). Esto se hace imprescindible para promover sistemas de riego más eficientes en los cultivos herbáceos (goteo, etc.) que permitan incrementar la superficie de riego con el mismo volumen total de agua.

Así mismo, en zona no autorizada, cuando se pretenda una modificación de una concesión existente para regadío dirigida a aumentar superficie de riego para cultivos leñosos, la dotación NO HA DE LIMITARSE a los especificado en el artículo 13.6.b).

Alegación 14.3:

ARTÍCULO 38.2.d) Las modificaciones de los derechos de extracción de agua subterránea vigentes en masas de agua en mal estado cuantitativo para regadío NO DEBERÁN conllevar una reducción del volumen máximo anual concedido conforme coeficientes de ningún tipo.

En este sentido cabe señalar que los cambios de titularidad, los sondeos de sustitución, las rotaciones, las transformaciones de explotaciones de riego por aspersión de cultivos herbáceos a riego por goteo de cultivos leñosos, etc, son modificaciones de los derechos de extracción, que sufrirían un peaje injusto que solo conllevarían incitar al abandono de las explotaciones agrícolas contribuyendo al abandono del mundo rural y a la “España vaciada”.

Alegación 14.4:

ARTÍCULO 38.2.e) En masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo no autorizada no solo no ha de aplicarse ningún peaje sino que, al igual que lo indicado para el artículo 38.1.d), cuando se pretenda una modificación de una concesión existente para regadío dirigida a aumentar superficie de riego o bien ampliar el riego a otras parcelas en rotación sobre un perímetro mayor, sin incremento de volumen total anual concedido, este aumento de superficie **NO HA DE LIMITARSE** al que permitan las dotaciones señaladas en el artículo 13.6.a), sino a la que sea posible justificar con un informe agronómico, siempre por debajo de los valores máximos señalados en el artículo 13.6.a). Esto se hace imprescindible para promover sistemas de riego más eficientes en los cultivos herbáceos (goteo, etc.) que permitan incrementar la superficie de riego con el mismo volumen total de agua.

Así mismo, cuando se pretenda una modificación de una concesión existente para regadío dirigida a aumentar superficie de riego para cultivos leñosos, la dotación **NO HA DE LIMITARSE** a los especificado en el artículo 13.6.b).

Alegación 14.5:

Art. 38.4.b) Sí debieran poderse otorgar nuevos derechos concesionales en una masa de agua subterránea en mal estado químico o en riesgo de no alcanzar el buen estado químico (todas las que aparecen en apéndice 11.3.4) para usos ganaderos en explotaciones intensivas de porcino o vacuno cuando la gestión prevista de los residuos sea la aplicación en terreno. Esto no solo limita completamente la posibilidad de instalar nuevas explotaciones, sino que simples cambios de titularidad de aprovechamientos anteriores a la ley de aguas reconocidos por Confederación, captaciones de sustitución para los mismos (necesarios por el deterioro de las captaciones con los años), etc., que implican nuevos derechos concesionales, obligarían al cierre automático de las explotaciones que abastecen.

Alegación 14.6:

Artículo 38.4.e) Las nuevas solicitudes de concesión y aprovechamientos por disposición legal de aguas para regadío, sobre masas de agua subterránea en mal estado químico, afectadas por contaminación difusa, **NO DEBERÍAN TENER QUE JUSTIFICAR** que la transformación de secano a regadío no conllevará el incremento de excedentes de nitrógeno derivados de la fertilización. En la mayoría de los casos esto es imposible, lo que en la práctica impediría cualquier nueva transformación en regadío con aguas subterráneas en la mayor parte del territorio de Castilla y León, así como las modificaciones (cambios de titularidad, sondeos de sustitución, etc) de los aprovechamientos anteriores a la ley de aguas reconocidos por Confederación, lo que obligaría a abandonarlos.

CONCLUSIÓN

Esperamos que se tengan en consideración las alegaciones y propuestas presentadas en este documento, y que las determinaciones que se establezcan finalmente, tengan en cuenta a la población del mundo agrario, así como en general, a todas las personas que viven y desarrollan su actividad dentro del mundo rural.

Valladolid a 21 de diciembre de 2021

Fdo: D. Conrado Iscar Ordóñez

Fdo: D. Gumersindo Sanabria Santervás

Fdo.: D. Ignacio Arias Ubillos

Fdo.: D. Jesús Fernando García Martín

Fdo.: D. Alberto Duque Ruiz

Fdo.: D. Armando Caballero Vadillo

Fdo.: D. Máximo Gómez Domínguez Fdo.: D. Miguel Ángel Peláez Lorenzo

Fdo.: D. Javier del Campo Diez

Fdo.: D. Moisés Santana Alonso

Fdo.: D. Guzmán Gómez Alonso

Fdo.: D^a M^a Heñar González Salamanca

Fdo.: D. José Arenal Velasco

Fdo.: D. Miguel Ángel Oliveira Rodríguez

Fdo.: D. Jesús Ángel González Morago

Fdo.: D. Lucio Fernández Choya

Fdo.: D. César López Calvo

Fdo.: D.^a Araceli Álvarez Álvarez

Fdo.: D.^a Celia Miravalles Calleja

Fdo.: D. Luis Mariano Sayalero Sanz

Ante D^a. Cristina Danés de Castro
PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
C/ Muro, n° 5 - 47004 Valladolid